

POR LA RECONSTRUCCIÓN VERDE Y SOCIAL DE ANDALUCÍA

Tabla de contenido

1.La pandemia y la reconstrucción.....	2
2.Organizar la esperanza frente al gobierno de la derecha en la Junta	3
3.Ofrecemos una alternativa viable para poner en valor nuestros recursos y fortalezas.....	4
4.Un modelo de sociedad.....	5
5.Modelo medioambiental	7
6.Modelo económico	8
8.Estado democrático y federal	13
9.Financiación y fiscalidad federal.....	15
10.A modo de conclusión	17

1. La pandemia y la reconstrucción

La pandemia ha exacerbado aún más la desigualdad que ya sufríamos. Andalucía tiene un nivel de renta 25 puntos inferior a la media (hay Comunidades como el País Vasco y Navarra que duplican nuestra renta), una tasa de paro 10 puntos superior y unas tasas de desempleo juvenil muy por encima de la media española y europea. Somos la segunda comunidad por la cola en PIB por habitante y sin embargo la administración andaluza es la segunda que menos fondos públicos recibe por habitante.

Al mismo tiempo el cambio climático amenaza gravemente al territorio andaluz. El modelo de desarrollo dominante en Andalucía desde los años sesenta ha esquilado el litoral, deteriorado nuestro modelo de ciudad, amenazado la supervivencia del medio rural, degradado la biodiversidad y contribuido a la desertización, la contaminación de ríos o el derroche en el consumo de agua. Andalucía tendrá que hacer frente a realidades acuciantes relacionadas con el aumento de temperatura, que podría subir de media más de 2 grados, siendo las zonas más afectadas el norte de Jaén, Granada y Córdoba. Entre las mayores amenazas se encuentran el déficit hídrico extremo, los incendios forestales, los efectos de la subida del nivel del mar y una elevación en la tasa de mortalidad.

La postpandemia va a traer consigo un cambio de rumbo que implicará una reestructuración de nuestra forma de entender el presente y va a cambiar el futuro de las próximas generaciones. y, desde luego, a Andalucía. En estos momentos, cuando el proceso de vacunación parece que nos va a situar en la zona de transición hacia el final de la pandemia, tenemos la posibilidad de abordar un cambio estructural para superar la desigualdad y hacer frente a la crisis climática, mediante la reconstrucción de nuestra sociedad y de nuestra economía, para hacerla más verde, social y digital, porque los nuevos fondos europeos son una gran oportunidad para Andalucía, tan necesitada de inversión para poder transformar nuestro modelo productivo, pero su

aprovechamiento va a depender de la orientación política los planes y proyectos de inversión.

2. Organizar la esperanza frente al gobierno de la derecha en la Junta

Nuestras instituciones de autogobierno, las que el Pueblo Andaluz ganó en las calles y plazas aquel 4 de diciembre de 1977 y de 1979, y en el referéndum del 28F de 1980, están, tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, en manos de una derecha, que se sostiene por el apoyo parlamentario de un partido de ultraderecha, porque no cree en la autonomía andaluza ni en la transición verde y social de Andalucía.

Sin embargo, la derecha es socialmente minoritaria. Ni sus políticas ni sus valores representan a la mayoría de las andaluzas y andaluces. Ha sido un triunfo coyuntural debido a múltiples factores como el desgaste del PSOE, tras más de 35 años gobernando en la Junta, agudizado por el escándalo de los Eres, así como por el descenso en votos de Adelante Andalucía.

Es prioritario impedir que el gobierno reaccionario en la Junta de Andalucía frustre la incorporación de Andalucía a una transición ecológica y social. Andalucía necesita avanzar y con Moreno Bonilla lo que hemos tenido son retrocesos: bajadas de impuestos a los que más tienen, eliminación de protección medioambiental, cierre de líneas públicas, cierre de ambulatorios, listas de espera en aumento, etc. Además, los cambios en la composición del bloque de la derecha, con el refuerzo de Vox y el hundimiento de Ciudadanos, agrava el problema, de tal forma que Vox puede tener perspectivas de ser aún más determinante e incluso de situarse dentro del próximo Gobierno de Moreno Bonilla, si ganan las elecciones, porque la oposición continúa desaparecida, centrada en sus luchas internas, hablando de sí misma, sin presentar una alternativa a la ciudadanía andaluza.

Ante esta situación, los firmantes de este documento, queremos lanzar un mensaje de esperanza. La situación andaluza no es producto de una maldición bíblica, es fruto de la desidia del Partido Popular ahora y del Partido Socialista

antes, que nunca han tenido ambición por construir una Andalucía de la que nadie tenga que marcharse.

Estamos en un momento crucial para construir un proyecto ilusionante y trasladar a la sociedad andaluza esa ola verde y social que recorre Europa. Andalucía necesita un impulso político, andalucista, verde, social, feminista y modernizador para dejar atrás el paro, la pobreza, la desigualdad y la dependencia, que nos sitúe entre los territorios más avanzados, de acuerdo con nuestras potencialidades y el nuevo clima global más propicio a las políticas de signo progresista.

Nuestro objetivo es alcanzar una representación importante en el parlamento andaluz. Estamos convencidos de que hay una oportunidad electoral, desde el prisma de la generosidad, el entendimiento y la lealtad, a pesar de que el actual sistema político pone grandes barreras para pasar a tener representación parlamentaria. Pondremos toda nuestras fuerzas y nuestra inteligencia para alcanzar este objetivo, gobernando o realizando una oposición efectiva al gobierno de la Junta, con denuncias concretas, tejiendo un marco propositivo.

3. Ofrecemos una alternativa viable para poner en valor nuestros recursos y fortalezas

Toda estrategia de cambio consiste en última instancia en construir una mayoría social y alcanzar la confianza del electorado en las urnas. Nuestro proyecto tiene el objetivo de contribuir a ampliar la dimensión participativa y representativa de la ciudadanía desde la identificación de objetivos comunes, adaptados a la sociedad actual, para la movilización del electorado progresista, que está desencantado por la falta de oposición, construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente corriente, aportando la esperanza de que juntos podemos mejorar y ofrecer más seguridad frente a la situación actual de incertidumbre.

Ofrecemos una alternativa viable que ponga en valor nuestros recursos y fortalezas. En Andalucía tenemos un enorme potencial a través de las energías renovables, tenemos una Autonomía consolidada, infraestructuras y potencial

humano. Andalucía es hoy uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Somos una sociedad abierta, moderna, compleja y plural con un enorme dinamismo y diversidad. Para que Andalucía puede dar el salto necesitamos más que nunca un revulsivo que nos despierte del letargo de 40 años en los que no se ha conseguido reducir la brecha de desigualdad que nos separa del resto del Estado. Andalucía necesita que crean en ella.

Una nueva alternativa capaz de disputarle al PSOE, como ha ocurrido en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, la mayoría del espacio progresista basada en cuatro ejes: las políticas verdes, el andalucismo, el feminismo y el contenido social, integradas en un marco democrático y federal que persiga una mayor soberanía y autonomía para Andalucía.

Para lograr que Andalucía ocupe una posición de igualdad en el concierto mundial, europeo y del Estado, proponemos un nuevo modelo, claramente andalucista, que abarque desde la sociedad, el medio ambiente, la economía y el poder público hasta las formas de financiación, capaz de generar consensos en la mayoría del pueblo andaluz, en el que, además de la profundización en los derechos sociales y laborales y en la garantía de los servicios públicos, el federalismo, la ecología y el feminismo constituyan contenidos democráticos imprescindibles, conectando estas perspectivas con soluciones a las necesidades inmediatas de la mayoría. Como decía Blas Infante, “hacer política es solucionar problemas sin crear otros mayores”

4. Un modelo de sociedad

Frente a la división y la polarización que está fomentando la extrema derecha, frente a la desigualdad o ante los procesos de aculturización, defendemos un modelo de sociedad basado en la convivencia democrática, en el respeto, el diálogo y el compromiso.

Hace ya demasiados años que se ha roto el ascensor social, el diálogo entre generaciones y entre territorios, lo que unido a la pandemia está marcando una crisis estructural grave. Esta crisis la están padeciendo más las mujeres porque, en una dinámica de destrucción de empleo, las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo. El machismo y, sobre todo,

la violencia y los asesinatos de mujeres son una lacra insoportable. La violencia de género se ve agravada en contextos tan difíciles como los que estamos viviendo y los cuidados, esenciales para abordar la pandemia, recaen mayoritariamente en las mujeres, que asumen mayor carga en las tareas domésticas y las relacionadas con los menores. Sin embargo, la transversalidad de género está ausente en mayoría de las políticas que se han desplegado durante la crisis. Por ello, estamos en la primera línea en defensa del feminismo en todos los ámbitos para la total erradicación de la violencia contra las mujeres, reivindicando el derecho al tiempo y a la vida, políticas públicas de apoyo y redistribución del trabajo de cuidados, reducción de las jornadas laborales y garantía de condiciones para proyectos personales, de crianza y familiares.

En nuestro modelo de sociedad se tienen que hacer realidad las justas aspiraciones de las personas LGBTQ+ a ser respetadas y a no sufrir ningún tipo de discriminación, acoso o violencia. Igualmente, a tener voz y participar en la toma de decisiones legislativas y administrativas que les afecten, encaminadas a eliminar las barreras que les impidan disfrutar de una ciudadanía plena, en libertad e igualdad.

Somos parte de nuestra cultura. Nuestro patrimonio cultural tiene unas características propias con una potente singularidad, porque es una cultura popular, producto de un proceso de sincretismo, con una evolución muy dinámica. El arte, la lengua, las costumbres o los modos de vida y valores colectivos, han sido el resultado de un proceso histórico que se ha caracterizado por el mestizaje y la integración. Esta síntesis está en continuo cambio porque es una construcción social viva, el Pueblo Andaluz. En especial, defendemos el habla andaluza como nuestra forma de identidad lingüística, culta y vanguardista.

Nuestro modelo de sociedad es profundamente antirracista, por lo que apoyamos las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la promoción integral del pueblo gitano y de todas las minorías étnicas y religiosas.

Hay una nueva brecha que amenaza con marginar a buena parte de la sociedad, la brecha digital que se abre entre los hogares dotados de espacio, banda ancha y ordenadores y los hogares pobres que carecen de todo esto y también por las carencias en la formación digital, en las metodologías adaptadas y en las estrategias educativas para la enseñanza digital. Por ello, integramos en nuestras propuestas las nuevas demandas que aseguren la universalización de los derechos digitales.

Necesitamos el desarrollo de políticas públicas que promuevan la participación ciudadana, la igualdad, la lucha contra la desigualdad económica y laboral, el pacto intergeneracional, la prevención de las violencias machistas y el apoyo a las víctimas y supervivientes, la visibilidad del colectivo LGTBIQ+, políticas antirracistas, la defensa de la cultura andaluza y el impulso del fortalecimiento de la cohesión comunitaria y de los vínculos sociales, para construir una Andalucía viva, plural y abierta.

5. Modelo medioambiental

La biodiversidad conforma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual dependemos porque es fuente de la vida y de la salud. Los ecosistemas actúan contra la polución y el efecto invernadero, mejorando la calidad del aire y las condiciones climáticas. Pero la biodiversidad es vulnerable y los ecosistemas han disminuido su capacidad para proporcionarnos servicios por la pérdida de hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de los recursos, la desertificación, el cambio climático, los incendios forestales y la contaminación.

Alineados con la ciencia, las ONGs y la juventud, para la protección de la biodiversidad proponemos una ley de cambio climático que asegure al menos la reducción de emisiones en un 55% para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, la sustitución de las fuentes energéticas fósiles por energías renovables, la rehabilitación energética de edificios sobre todos en los barrios más pobres, la reutilización de los materiales y la eliminación de residuos, terminar con los envases de plásticos, y una nueva cultura del agua resaltando su carácter de servicio público, y la necesidad de modernizar y actualizar el

sistema de regadío, preservar los cauces y almacenes naturales y racionalizar su consumo.

El precio de la electricidad ha subido cerca de un 40% en lo que va de año, poniendo en riesgo de pobreza energética a miles de familias andaluzas, mientras que disponemos de recursos públicos renovables que, en régimen de autoconsumo, pueden reducir e incluso suprimir la factura de la electricidad, lo que demuestra que la transición ecológica y la justicia social pueden ir de la mano.

También defendemos una nueva movilidad sostenible. Frente al modelo de conexión vertical con Madrid que el centralismo ha impuesto históricamente, Andalucía necesita un modelo en red para facilitar las relaciones sociales y económicas entre las personas y empresas andaluzas, que garantice la accesibilidad, reconstruya el territorio y los espacios urbanos, prime el transporte de cercanías, invierta la proporción del transporte de mercancías entre carretera y ferrocarril, haciendo realidad el corredor mediterráneo y otras infraestructuras y conexiones ferroviarias, limite el tráfico pesado en carretera y autopistas, elimine los vuelos peninsulares con alternativa ferroviaria y promueva que los centros urbanos de todas las ciudades y pueblos estén “desmotorizados”: libres para peatones, ciclistas y transporte público y restringidos para el coche.

Para impulsar estos objetivos, las Asambleas Climáticas Ciudadanas son una pieza clave porque, en este proceso, la implicación de la sociedad se vuelve más importante que nunca.

6. Modelo económico

La recuperación económica debe ir conectada al cambio del modelo productivo. Tenemos una propuesta para transformar Andalucía, basada en el reequilibrio de los sectores productivos y en la superación de nuestro papel económico dependiente y subalterno. Proponemos un acuerdo verde y social para Andalucía que mejore la economía, cree empleo, cuide de nuestra salud y de la del planeta, uniendo innovación, derechos laborales, feminismo y ecología en

torno a una estrategia de desarrollo selectivo que garantice el empleo de calidad.

Nuestra prioridad es la lucha contra el desempleo. Podemos crear cientos de miles de empleos en la economía verde complementados con rentas y trabajos garantizados, que son cruciales para sumar la mayoría de la población a la transición ecológica.

Ponemos al trabajo en el centro de las políticas para que no sea tratado como una mercancía sino como un requisito para la dignidad humana. Por eso defendemos los derechos laborales, la reducción de la jornada laboral, la estabilidad y la calidad en el empleo y la participación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, en un proyecto en la que la economía esté al servicio de las personas, de la comunidad y de la reproducción de la vida y de la naturaleza.

Apoyamos a los Autónomos, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, imprescindible para la creación de empleo y para un tejido empresarial denso y consistente que, sin embargo, tienen menor capacidad relativa de acceso a los mercados de financiación mayorista o a las líneas tradicionales de las entidades de crédito. Queremos una nueva clase empresarial alejada del rentismo especulativo y del centralismo, comprometida con Andalucía y con los valores sociales, preocupadas por su entorno, respetuosas con el medio ambiente que promueva, además, un consumo más cívico.

Queremos que Andalucía sea el centro industrial verde en la conexión entre Europa y África y entre el atlántico y el mediterráneo, con industria digital, economía circular y energías renovables 100%, comercio de cercanía, agricultura y turismo sostenible, consumo responsable y poder financiero propio.

Apostamos por la industria no contaminante de capital andaluz que requiere de mano de obra cualificada, por la transformación de los productos agrarios en nuestra propia tierra y por una sólida base tecnológica que incorpore los nuevos procesos de fabricación basados en la innovación tecnológica.

Necesitamos una estructura industrial amplia y diversificada construida a partir de la incorporación de nuevas actividades, sobre todo las llamadas industrias en red y los servicios destinados a empresas, y la modernización de los sectores tradicionales, que logre alcanzar la media europea del PIB (20%) y dé respuesta prioritaria a la demanda interna andaluza.

En el turismo debemos superar el modelo de alta estacionalidad y márgenes ajustados, controlado por los tours operadores con sede en Berlín o en Londres e impulsar un turismo donde no importe tanto la rotación sino la calidad y en el que la riqueza generada se reinvierta en mayor medida en nuestra tierra.

La capacidad del sector público para asegurar una investigación científica y técnica de alto nivel es una condición sine qua non para que se produzca la innovación en las empresas y los mercados, y se acelere, consiguientemente, el desarrollo productivo. La brecha tecnológica de Andalucía (representa tan sólo el 7,7% de gastos totales en actividades innovadoras de las empresas respecto a España) es un impedimento para el cambio. La acción pública y privada debe tender a la convergencia tecnológica y a la articulación de una red de centros científicos de Andalucía coordinados con las universidades y los espacios tecnológicos industriales, orientados a la investigación en sectores y actividades sostenibles.

Cualquier modelo económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo. Debemos promover las actividades vinculadas a nuestro entorno, a través de la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de los recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad. Por ejemplo, comprar alimentos locales y no globales reduce las emisiones de CO2 aumentando al mismo tiempo los estándares de bienestar.

La cultura es uno de los sectores que mayor innovación y riqueza humana aportaría a Andalucía siempre y cuando se haga una apuesta desde las instituciones públicas pragmática y sensata que permita la redistribución de los recursos para evitar un modelo basado en grandes eventos, y, sobre todo, dado

el tamaño de las empresas culturales, potencie la economía social dentro del sector para convertirlo en un referente.

7. Un Estado socialmente avanzado

El sector público, frente a la ideología neoliberal que lo había denostado, ha aparecido en esta crisis como el garante de la protección básica de la ciudadanía. Hemos visto cómo la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de tener un sistema sanitario público de carácter universal que atienda con equidad los problemas de salud de todas las personas. En cualquier circunstancia, pero especialmente en las situaciones de emergencia, poder garantizar la protección de los segmentos más vulnerables es lo que marca la diferencia con la sanidad privada. Estados democráticos con una institucionalidad desarrollada y buenos gobiernos son una garantía para la seguridad ciudadana mientras que las personas que viven en Estados con una mala institucionalidad o con gobiernos irresponsables, están indefensas.

Defendemos el papel del Estado, en sentido amplio, como garante de los servicios públicos y como agente de cambio y de transformación económica. Estado democrático y comunidad, en su despliegue pluralista, lejos de ser realidades políticas antagónicas, establecen entre sí una dinámica virtuosa de modo que sin Estado no hay comunidad y sin comunidad no hay Estado que pueda funcionar democráticamente. El Estado (en sentido amplio, incluyendo tanto las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales) tiene el deber y la capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas de la ciudadanía al margen del mercado, lo que hoy incluye el derecho a la vida amenazada por la crisis ecológica y por las pandemias.

La calidad de los recursos humanos constituye el elemento más importante para el cambio a medio y largo plazo. Es necesario hacer un gran esfuerzo para dotar al sistema educativo de los recursos necesarios (Andalucía, que representa el 22% de la población escolarizada de España, debería invertir casi 2.000 millones de Euros en enseñanza y en formación para llegar al 6% del PIB, que es la media del gasto en educación de la OCDE) e implicar a toda la Comunidad Educativa en una reforma de las enseñanzas para que se adapte a

las demandas de nuestra época y proporcionen una formación adecuada a los jóvenes de forma que les permita desenvolverse con autonomía buena capacidad intelectual y mayor conocimiento de su cultura y su historia.

La Salud debe ser el eje transversal de todas las políticas públicas, con medidas de eficiencia en la gestión del gasto público y políticas sanitarias sostenibles que centren sus objetivos en la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía, situando el gasto sanitario en al menos el 7,2% del PIB y la atención primaria hasta el 25% del gasto sanitario, poniendo en funcionamiento un plan para la eliminación de las listas de esperas que es consecuencia no solo de la falta de medios materiales y humanos sino también de la falta de aplicación de metodologías de gestión y coordinación eficientes y una estrategia en Salud Mental para mejorar y reforzar los recursos psicoterapéuticos y la inclusión sociolaboral plena, con garantía a los derechos humanos y la lucha contra el estigma. El sistema público de Salud debe extenderse a toda la cadena de fabricación y distribución para asegurar los recursos sanitarios esenciales y no depender del sector privado.

Promovemos un parque público de viviendas al servicio de la ciudadanía, habitable, y de entidad suficiente para satisfacer el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Nuestro objetivo es que en Andalucía se alcance una inversión pública de hasta el 2'5% del PIB andaluz destinado a lograr viviendas asequibles, priorizando la vivienda pública de alquiler y la rehabilitación energética de los edificios con programas dirigidos específicamente a la vivienda de jóvenes y personas mayores para reducir los costes de servicios públicos como el agua y la electricidad, y de las emisiones de carbono de los hogares.

La garantía de los derechos sociales y los servicios públicos es condición necesaria para la cohesión social, el empoderamiento de la ciudadanía, la defensa de la democracia, la igualdad de género, el autogobierno y el pacto federal, el fortalecimiento de los poderes públicos y la transformación del modelo económico. Defendemos el derecho a la enseñanza, a la salud, a la vivienda, a un sistema público de pensiones que asegura una vida digna a los pensionistas, a las prestaciones por situación de dependencia, a una renta

social básica y a la vivienda y los derechos ambientales, configurados como derechos públicos subjetivos. Queremos hacer realidad la renta climática financiada a través de los impuestos recaudados de quienes más contaminan.

8. Estado democrático y federal

En la base de toda nuestra acción política está el concepto de democracia como medio y como fin. La democracia es mucho más que una estructura política: es un código de valores basado en la libertad, la justicia social, la paz, la igualdad, la autonomía personal y colectiva, la solidaridad y la cooperación. Queremos la rehabilitación de la política para el reforzamiento de la democracia, mediante la participación activa de la ciudadanía en la vida social y política y el fortalecimiento de los poderes públicos, en su cuádruple función de redistribuidor, prestador de servicios públicos, regulador y emprendedor para la transición ecológica, económica y social.

A pesar del sistema autonómico, España está en su nivel más alto de centralización. La tendencia a la concentración de poder económico en las capitales es algo global. La Cuarta Revolución Industrial está tecnificando la economía y eso implica que las empresas transnacionales y de servicios, intensivas en capital humano e innovación, se ubican más en los grandes nodos urbanos. El centralismo ha logrado convertir a Madrid, como sede del Estado, en una gran metrópoli a costa de empobrecer a la periferia, cuando una sociedad ya no se puede organizar a partir de un centro porque eso solo añade disfuncionalidad y más desigualdad.

La reconstrucción y renovación económica y social de Andalucía requiere arreglos institucionales que culminen la democratización del Estado, a través de un modelo de organización territorial, superadora del Estado de las autonomías, que avance hacia un Estado Federal, en el que los Estatutos de la Comunidades Autónomas tengan la naturaleza de norma constitucional.

Proponemos un federalismo del siglo XXI, que se estructure a través de la autonomía en todos los niveles existentes, enlazando, mediante la participación y la codecisión, las distintas escalas de poder público, desde los municipios, las Comunidades Autónomas y el Estado central hasta la Unión Europea. En este

contexto, la plurinacionalidad es la cultura que puede lubricar todo el sistema para una convivencia basada en el respeto y la tolerancia de las diferencias, en la diversidad multiétnica y multicultural.

La base federal, al igual que el andalucismo, descansa en el municipalismo. El ámbito municipal establece una relación de cercanía entre la ciudadanía y sus representantes que permite formas de hacer política de elevada calidad democrática, porque la actividad municipal es la que mejor se presta a la introducción de dinámicas participativas y de control democrático, exigiendo, al mismo tiempo, la eficiencia y el pragmatismo político inherentes a la necesidad de dar respuestas concretas a problemas concretos, pero el municipalismo no se reduce a la mera gestión, sino que nuestra vocación municipalista nos lleva a construir un municipalismo reivindicativo en cada municipio, y también a través de organismos y redes de cooperación intermunicipal que preserven el protagonismo de los ayuntamientos en la defensa de intereses comunes. Es imprescindible lograr una efectiva autonomía municipal y una adecuada financiación para que, en el ejercicio de sus competencias, los ayuntamientos puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Revitalizaremos nuestro Autogobierno impulsando el desarrollo completo del Estatuto en todas sus posibilidades, haciendo realidad los derechos que contempla, al mismo tiempo que denunciaremos toda discriminación en nuestro nivel competencial con respecto a las demás Comunidades Autónomas de la vía del 151, proponiendo las reformas estatutarias pertinentes. Haremos una defensa rigurosa de los símbolos andaluces, hoy atacados desde la misma Junta de Andalucía, que representan a todo el Pueblo Andaluz, al mismo tiempo, representan también las demandas de autonomía, igualdad y justicia de las clases y grupos no privilegiados de Andalucía.

Necesitamos ir más allá de la autonomía jurídica, necesitamos una autonomía estratégica para que Andalucía disponga de los recursos y el poder suficiente para superar nuestra posición de subalternidad y dependencia. Queremos que se aborden de inmediato los trasposos de efectivos y medios para la creación de la Policía Autonómica, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Inspección de Trabajo y los Trenes de Cercanía. Consideramos inaplazable la

participación de la Administración andaluza en los órganos y empresas de titularidad estatal que afectan a nuestra tierra tal como el Banco de España, la Agencia Estatal Tributaria, AENA, Puertos del Estado, etc,

España es un Estado federal incompleto. El Estado de las Autonomías, por su desarticulación federal, se ha convertido en el Estado de la autonomía del centralismo madrileño, provocando en vez de menos, más desigualdad. Por eso, en nuestro horizonte, como andalucistas y progresistas, está la reforma federal de la Constitución, transformando el actual Senado, que es una Cámara sin funcionalidad real, en una Cámara de representación de los territorios, y la federalización del Poder Judicial, tal como existe en los Estados federales. Al mismo tiempo, impulsaremos todos los órganos territoriales multilaterales de coordinación política como la Conferencia de Presidentes Autonómicos y las Conferencias Sectoriales, otorgándoles mayor capacidad de decisión. Asimismo, reivindicamos la distribución territorial de las instituciones constitucionales, desde el tribunal Constitucional al Consejo del Poder Judicial, y de órganos y organismos relevantes proponiendo, a título de ejemplo, que Puertos del Estado resida en Algeciras, el hub aeroportuario en Málaga o Salvamento Marítimo en Almería.

Igualmente reivindicamos la construcción de una Europa política, es decir federal, social y ecológicamente viable, frente al desorden de la globalización, como opción estratégica para la defensa de los intereses de las clases populares en la construcción de un mundo multipolar pacífico.

9. Financiación y fiscalidad federal

El sistema de financiación autonómico aprobado en el año 2009 por un plazo de cinco años, perjudica gravemente a Andalucía. El actual modelo lejos de garantizar la equidad ha generado una mayor desigualdad entre territorios, agravado en el contexto de crisis y de reducción importante de ingresos, y no garantiza la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas.

Somos deficitarios en los servicios públicos fundamentales, cuya nivelación debe garantizar el sistema (sanidad, educación y asistencia social) y

necesitamos inversión pública para transformar el sistema productivo y crear empleo.

El sistema de financiación autonómica es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios. Una financiación autonómica justa debe estar basada, como criterio de reparto, en el principio de equidad (reparto de fondos en función del número de habitantes) y no en el principio de ordinalidad como sucede con este sistema de financiación (reparto de fondos por contribución por habitante), porque de lo contrario lo que se provoca es el aumento de las desigualdades.

Necesitamos una nueva financiación autonómica en base a los principios de suficiencia, autonomía y cohesión territorial y financiación por habitante ajustado, incorporando la Ley de Dependencia al sistema.

Igualmente es imprescindible abordar la financiación local con criterios de equidad aumentando, por una parte, la capacidad fiscal de los municipios y, por otra, acometiendo una revisión en profundidad del componente de transferencias del sistema, que debe tener un objetivo explícito de nivelación. Al mismo tiempo, es urgente la mejora de la autonomía tributaria con mejores instrumentos para modular los ingresos, y la clarificación en la división de tareas, competencias y recursos, ampliando las competencias de las entidades locales en servicios de proximidad al ciudadano.

Queremos activar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en el artículo 184 del Estatuto de Autonomía, con funciones tan relevantes como debatir las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberían estar cuantificadas en proporción inversa a nuestra renta, dando cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) es una pieza fundamental para alcanzar la solidaridad interterritorial, ya que es el instrumento constitucional que tiene la función de corregir los desequilibrios regionales y hacer efectivo así el principio de solidaridad entre los territorios para promover inversiones que generen directa o indirectamente la creación de renta y riqueza, corrigiendo

la desigualdad estructural. Sin embargo, el FCI carece de relevancia cuantitativa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha acabado siendo un instrumento marginal de la política regional, por lo que debe dotarse en la cuantía suficiente para cumplir con su función constitucional.

Andalucía carece actualmente de instrumentos financieros con los que poder inyectar liquidez a las PYMES y a las familias. Necesitamos instrumentos propios de crédito, desde un banco público hasta mercados secundarios alternativos de renta fija para PYMES, para avanzar hacia un sistema financiero mixto público/privado.

Para hacer frente a todo ello, necesitamos una reforma fiscal basada en la suficiencia de recursos, redistribuyendo la carga fiscal con criterios de justicia social, con más progresividad, que impida el fraude y la elusión, impulse la transición ecológica, incentive la economía productiva y sostenible, apoye a la pequeña y mediana empresa, penalice las actividades especulativas, contaminantes y destructoras de los recursos naturales, sea más sencillo y transparente, y se gestione mejor, ampliando la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas para poder disponer de un sistema fiscal propio en el que primen los recursos tributarios verdes para interiorizar los costes reales medioambientales.

10. A modo de conclusión

La salida de la crisis provocada por la pandemia tiene que ser una salida de cambio en Andalucía que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, tanto las socio-económicas como las feministas, antirracistas y LGTBI, vinculando la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de resolver los problemas sociales, con un nuevo pacto que sume transición ecológica y justicia social, apoyado por la mayoría de la sociedad, basado en una distribución equitativa de los costes de la transición. Los contenidos verdes de los planes de reconstrucción y la posible victoria de los verdes en el país más potente de la UE, en Alemania, en las elecciones federales del 26 de septiembre, indican que hay una corriente importante que empuja en esa dirección.

El proyecto político que presentamos habla de las personas, pero también las escucha, habla de lo concreto, de mejorar sus vidas con propuestas realistas, sencillas, que permitan aliviar las condiciones del día a día, que nos devuelva la esperanza y la autoestima. Necesitamos soluciones concretas para que las familias disfruten de sanidad y educación dignas, para que los jóvenes puedan proyectar su futuro, para que no tengamos miedo a llegar a fin de mes o a sufrir cualquier contratiempo inasumible, para que Andalucía ocupe el lugar que se merece y para que la economía verde nos permita crecer en oportunidades. Nuestras propuestas son transversales, constructivas, con la aspiración fundamental de conectar la acción con las realidades cotidianas, con la vida y sus fragilidades, ampliando la agenda política con problemas inaplazables.

Para ello, vamos a emprender una campaña de largo aliento, con objetivos y estrategias consensuadas y positivas, sin perjuicio de su adaptabilidad a las circunstancias que se vayan sucediendo.